

Julio 24 de 1946

13ª REUNION — 12ª SESION ORDINARIA

Presidencia del doctor JUAN HORTENSIO QUIJANO, vicepresidente de la Nación
Secretarios ad hoc: senadores doctores VICENTE LEONIDES SAADI y PABLO A. RAMELLA

SENADORES PRESENTES:

AMELOTTI, Osvaldo
ANTILLE, Armando G.
ARRIETA, Alfredo J. L.
AVENDAÑO, Arcadio
BASALDÚA, Juan Carlos
BAVIO, Ernesto F.
BUSQUET, Alfredo
CRUZ, Luis
DURAND, Alberto
FIGUEIRAS, Demetrio
GÓMEZ DEL JUNCO, Felipe
GÓMEZ HENRÍQUEZ, Samuel
HERRERA, Julio
LAZARO, Juan Fernando de
LORENZÓN, Ricardo Octavio
LUCO, Francisco R.
MARTÍNEZ, Ramón Linidor
MATHUS HOYOS, Alejandro
MOLINARI, Diego Luis
RAMELLA, Pablo A.
SAADI, Vicente Leonides
SOLER, Lorenzo
SOSA LOYOLA, Gilberto
TANCO, Miguel A.
TASCHERET, Oscar
TEISAIRE, Alberto
VALLEJO, César

AUSENTE, CON AVISO:

ZERDA, Justiniano de la

SUMARIO

- 1.—A indicación del senador Molinari, el Honorable Senado rinde homenaje a la memoria del doctor Enzo Bordabehere.
- 2.—Proyecto de decreto de los senadores Ramella y Molinari, referente a la forma de practicar el sorteo para establecer la duración del mandato de los senadores. Se trata sobre tablas y se aprueba.

3.—Realización del sorteo.

4.—Asuntos entrados:

- I.—Mensaje del Poder Ejecutivo solicitando acuerdos.
- II.—Mensaje del Poder Ejecutivo solicitando la ratificación del decreto 32.347/44, que crea el fuero del trabajo para la Capital Federal.
- III.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo ratificando varios decretos que modifican la ley orgánica de la armada.
- IV.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo ratificando decretos originados en el Ministerio de Marina sobre ascensos de oficiales superiores, creación de la Gobernación Marítima de Tierra del Fuego, transferencias de terrenos del Estado a favor de instituciones, autorización de licitaciones privadas, disposiciones sobre navegación y comercio de cabotaje nacional, disposiciones referentes a actividades de la marina mercante, asignaciones por mayor costo de la vida en el extranjero, excepciones a personal militar de disposiciones de la ley orgánica de la armada, expropiación de un terreno de propiedad municipal y creación de la Dirección Nacional de la Marina Mercante.
- V.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo ratificando decretos relacionados con la Administración General de la Flota Mercante del Estado.
- VI.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo ratificando el decreto 9.627/45, que acuerda a la División Obra Social de la Secretaría del Ministerio de Marina un préstamo de hasta \$ 4.000.000 moneda nacional.
- VII.—Mensaje del Poder Ejecutivo solicitando que al considerarse la aprobación del decreto 29.375/44 (ley orgánica del ejército), se tome como texto definitivo de

los artículos 126 y 228, el que se especifica en las notas que adjunta.

VIII.—Mensaje del Poder Ejecutivo sometiendo a consideración del Honorable Congreso los decretos originados en el Ministerio del Interior después del 4 de junio de 1943.

IX.—Mensaje del Poder Ejecutivo sometiendo a consideración del Honorable Congreso los decretos relacionados con Trabajo y Previsión dictados por el Poder Ejecutivo surgido de la revolución del 4 de junio de 1943.

X.—Mensaje del Poder Ejecutivo en contestación a la comunicación del Honorable Senado sobre los perjuicios que causa la maleza llamada «morenita».

XI.—Mensaje del Poder Ejecutivo en contestación a la comunicación del Honorable Senado sobre provisión equitativa de vagones a obreros, ganaderos, productores de carbón, etcétera.

XII.—Comunicaciones oficiales.

XIII.—Comunicaciones particulares.

5.—Proyecto de ley del senador Teisairé y otros senadores disponiendo la adopción del texto único, aprobado y editado por el Estado, y la enseñanza gratuita en los establecimientos oficiales.

6.—Proyecto de ley de los senadores Teisairé y Saadi estableciendo normas para la sublocación de habitaciones en las casas clasificadas como inquilinatos.

7.—Proyecto de comunicación del senador Mathus Hoyos y otros senadores sobre cumplimiento del artículo 9º, inciso b) de la ley 11.627, de enseñanza agrícola, funcionamiento de escuelas normales de adaptación regional rural, etcétera.

8.—Consideración del despacho de la Comisión de Legislación General sobre arrendamientos agrícolas y subarrendamiento de tierras dedicadas a explotaciones tamberas y producción de las tierras semiáridas del Norte del país. Se aprueba con modificaciones.

9.—Apéndice:

I.—Acta del sorteo para establecer la duración del mandato de los senadores.

II.—Sanción del Honorable Senado.

III.—Inserción.

—En Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de julio de 1946, siendo las 15 y 15, dice el

Sr. Presidente. — Queda abierta la sesión.

1

HOMENAJE

Sr. Molinari. — Pido la palabra.

El 23 de julio de 1935 debía continuar la cuarta sesión ordinaria después de la vigésima-sexta reunión de lo que se dijo Honorable Senado de la Nación. Ayer se cumplió el undécimo aniversario de la fecha mencionada.

La edición definitiva del Diario de Sesiones, estampa en una página que será la lápida que recogerán con su enseñanza las futuras generaciones, las siguientes palabras, en un recuadro: «Con motivo de los sucesos ocurridos en el recinto durante esta sesión, fué suspendida su publicación por resolución del Senado, tomada en la reunión número 27, realizada el mismo día, autorizándose su impresión en la sesión del 10 de septiembre de 1935.» (Véase tomo II.)

La vigésimaséptima reunión, continuación de la cuarta sesión ordinaria, bajo la presidencia del doctor Carlos A. Bruchmann, del mismo día 23 de julio de 1935, comenzó a las 18 horas y 25 minutos, y se levantó a las 18 horas y 35 minutos, según reza el acta taquigráfica, abonada en su fe por el director de Taquígrafos de entonces, señor Ramón Columba, que todavía sigue siéndolo.

¡Una hoja tirada al viento! Mas, ¿qué dirá el futuro historiador cuando recoja de estos anales la lección? ¿Cuál era el «lamentable incidente» ocurrido en este recinto, según las palabras del señor Serrey, senador fraudulento por la provincia de Salta, óigase bien: senador fraudulento por la provincia de Salta? Lo único que acababa de pasar era el fallecimiento de Enzo Bordabehere, senador electo por la provincia de Santa Fe. Y aquí están muchos, todavía hoy, que recordarán el trágico momento vivido aquel día y que tendrán presente, como si fuese hoy, la víctima tendida ahí, en este lugar (*el orador señala el centro del recinto*) y al asesino escurriéndose por entre, digamos así, la muchedumbre de los que, presa de pánico, no sabían qué hacer frente a este acontecimiento inusitado y terrible. Ministros debajo de esas bancas —digamos ministros por decir alguna cosa—; senadores a la deriva, por entre estas otras bancas —digamos senadores por decir alguna cosa—. Era en oportunidad del famoso debate sobre las carnes, promovido por el senador Lisandro de la Torre, cuando se produjo el asesinato. La *mise en scène* preparada extraordinariamente bien: un autor material, que purga entre los muros de la cárcel la pena que mereció ese delito; pero los responsables morales del asesinato todavía andan sueltos. ¿Puede que haya corrido la prescripción del Código Penal, mas no ha corrido la prescripción de la opinión pública!

II

Buenos Aires, 23 de julio de 1946.

Al Honorable Congreso de la Nación.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a vuestra honorabilidad para solicitarle la ratificación legislativa del decreto 32.347/44 de fecha 30 de noviembre de 1944, que crea el fuero del trabajo para la Capital de la Nación, cuyo texto en copia se adjunta.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

JUAN PERÓN.

Angel G. Borlenghi.

Buenos Aires, 30 de noviembre de 1944.

Visto el proyecto elevado por la Secretaría de Trabajo y Previsión sobre creación y organización de los Tribunales de Trabajo; y

CONSIDERANDO:

Que el movimiento legislativo contemporáneo, en lo que respecta a las normas que rigen las relaciones jurídicas del capital y el trabajo, ha dado forma a un nuevo derecho cuyo contenido social y humano tiende a proteger la parte débil de esa relación;

Que frente a problemas que justifican la existencia de un derecho autónomo, debe admitirse la necesidad de un fuero y procedimientos propios, pues no sería posible que, mientras la legislación de fondo fuera creando un régimen jurídico de excepción, el derecho procesal se mantuviera estacionario;

Que los trámites procesales de la justicia ordinaria, aplicados a los litigios del trabajo, resultan formulistas, onerosos y carentes de la celeridad que exigen los fines perseguidos por la legislación respectiva;

Que la inadaptación de esas reglas procesales a la solución de los conflictos derivados de las relaciones del trabajo, pone en evidencia la necesidad de instituir organismos especializados y procedimientos expeditivos y de restablecer, mediante normas adecuadas, la igualdad de las partes evitando la gravitación de su distinta posición económica;

Que dando satisfacción a las expresadas exigencias la mayor parte de las naciones han establecido tribunales y normas especiales para dirimir los conflictos de trabajo;

Que la necesidad del establecimiento de los tribunales del trabajo ha sido puesta de manifiesto en recomendaciones de congresos nacionales e internacionales y, en nuestro país, en diversas iniciativas gubernamentales y parlamentarias, así como en conclusiones sostenidas por los autores e instituciones de estudio.

Por ello,

El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,

DECRETA:

CAPÍTULO I

Organización y competencia

Artículo 1º—En la Capital de la República la justicia del trabajo se ejercerá por la Comisión de Con-

ciliación, las de arbitraje, los jueces de primera instancia y la Cámara de Apelaciones. Su organización, competencia y procedimiento se regirán por las normas que el presente decreto establece.

Art. 2º — La jurisdicción del trabajo no podrá ser delegada, y su competencia es improrrogable.

Art. 3º — Serán de competencia de la jurisdicción del trabajo las causas que se susciten entre empleadores y trabajadores, por conflictos de derecho, fundadas en disposiciones de los contratos de trabajo, de empleo, de aprendizaje o de ajuste de servicios, y todas aquellas otras, contenciosas, en que se ejerciten acciones derivadas de disposiciones legales o reglamentarias del derecho del trabajo.

Art. 4º — Será competente para conocer en la causa, el juez del lugar del trabajo, el del domicilio del demandado o el del lugar donde se hubiere celebrado el contrato, a elección del demandante.

Art. 5º — La Comisión de Conciliación estará compuesta de un presidente, un vicepresidente y el número de vocales que determine la Secretaría de Trabajo y Previsión.

Deberán reunir las siguientes condiciones: ser argentinos nativos, mayores de 25 años, con título de abogado, escribano o procurador, y tener especial versación en derecho del trabajo. El presidente y vicepresidente de la comisión deberán tener título de abogado.

Art. 6º — Las comisiones de arbitraje se constituirán, en cada caso, con el presidente o vicepresidente de la Comisión de Conciliación, y con un representante patronal y otro obrero, elegidos por las partes. Actuará como secretario el vocal de la Comisión de Conciliación que el presidente designe.

Art. 7º — Los representantes patronales y obreros deberán reunir las siguientes condiciones: ser argentinos, mayores de 25 años, de notoria buena conducta, saber leer y escribir, ejercer actividad de la misma especialidad que la de las partes y estar en el pleno ejercicio de sus derechos civiles.

Art. 8º — Las comisiones de arbitraje entenderán en los casos en que las partes, de común acuerdo, decidieran someter a su resolución los conflictos de derecho motivados por rebaja de la remuneración o modificación de las condiciones de trabajo.

Art. 9º — La Secretaría de Trabajo y Previsión organizará el funcionamiento de la Comisión de Conciliación y las de arbitraje, de acuerdo a las prescripciones del presente decreto.

Art. 10. — Los jueces de primera instancia y los miembros de la Cámara de Apelaciones serán nombrados por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado, a propuesta en terna de la Secretaría de Trabajo y Previsión.

Deberán reunir las siguientes condiciones: ser argentinos nativos, abogados, mayores de 30 años, haber ejercido en el país durante cuatro años su profesión o desempeñado por igual término empleo judicial y tener especial versación en derecho del trabajo.

Art. 11. — Los jueces de primera instancia prestarán juramento ante la Cámara de Apelaciones, y los miembros de ésta ante su propio seno.

Art. 12. — Los jueces de primera instancia y los miembros de la Cámara de Apelaciones durarán en sus funciones mientras observen buena conducta y sólo podrán ser removidos por las mismas causales establecidas para los demás magistrados judiciales de la Nación, sobre denuncia formal y escrita de

cualquier interesado, y en virtud de sentencia fundada de un tribunal compuesto por dos vocales de las cámaras de apelaciones en lo civil y un vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, designados por sorteo.

La denuncia deberá ser deducida ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil en turno, la que, si la estima revestida de seriedad, la someterá al juicio del expresado tribunal.

Art. 13.—De la denuncia se dará vista al acusado por seis días y vencido el término, hubiere o no contestación, se convocará a las partes a una audiencia con intervalo de diez días.

Las partes podrán ofrecer pruebas y pedir las medidas necesarias para producir las mismas en la audiencia expresada.

El juez acusado podrá ser suspendido desde la presentación de la denuncia.

La sentencia se dictará dentro de los diez días de recibidas las pruebas y, si fuere condenatoria, sólo tendrá por efecto dejar cesante al juez.

Art. 14.—En la Capital de la República habrá veinte jueces de primera instancia. Cada juzgado tendrá un secretario que deberá reunir las siguientes condiciones: ser argentino nativo, abogado, escribano o procurador, mayor de 25 años y tener especial versación en derecho del trabajo.

Art. 15.—La Cámara de Apelaciones estará compuesta de un presidente, un vicepresidente y cinco vocales. El presidente y vicepresidente serán elegidos anualmente por mayoría de votos, no pudiendo ser reelecto sino con intervalo de un período.

Art. 16.—La cámara funcionará dividida en tres salas. Cada sala estará compuesta por el presidente de la cámara y dos vocales y hará tribunal con el total de sus miembros, pudiendo actuar con dos en caso de que no hubiere discrepancia.

Art. 17.—La cámara se reunirá en pleno para unificar la jurisprudencia cuando cualquiera de las salas entendiera que es conveniente fijar la interpretación de la ley o de la doctrina aplicable.

Art. 18.—La cámara tendrá tres secretarios que deberán reunir las siguientes condiciones: ser argentinos, mayores de 25 años, abogados, y tener especial versación en derecho del trabajo.

Art. 19.—La Cámara de Apelaciones conocerá:

- a) De los recursos de apelación que se interpongan contra las sentencias de los jueces de primera instancia;
- b) De los recursos de apelación que se interpongan en los casos autorizados por las leyes de previsión social;
- c) De los recursos que autoriza el artículo 6º de la ley 11.570;
- d) De los recursos de queja y retardo de justicia;
- e) De las recusaciones de sus propios miembros y de los jueces de primera instancia;
- f) De los recursos de nulidad interpuestos contra las resoluciones de las comisiones de arbitraje.

Art. 20.—El Ministerio Público del Trabajo será desempeñado por un procurador general del trabajo y el número de representantes que determine la reglamentación respectiva.

El procurador general del trabajo y los representantes del ministerio público deberán reunir las mismas condiciones exigidas para los jueces y secretarios de primera instancia, respectivamente.

Art. 21.—Corresponde al ministerio público en esta jurisdicción:

- a) Representar y defender los intereses fiscales;
- b) Intervenir en todo asunto judicial que interese a la persona o bienes de los menores de edad, dementes y demás incapaces, y entablar en su defensa las acciones o recursos necesarios, sea directa o juntamente con los representantes de aquéllos;
- c) Velar por el cumplimiento de las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones que deban aplicar los tribunales del trabajo, pidiendo el remedio de los abusos que notare;
- d) Ser parte necesaria en todas las causas del trabajo y en las contiendas de jurisdicción y competencia;
- e) Representar a la caja de garantía creada por la ley 9.688, en todas las jurisdicciones.

Art. 22.—La Secretaría de Trabajo y Previsión organizará el Ministerio Público del Trabajo y dictará las normas reglamentarias con sujeción a las cuales deberá ejercer sus funciones.

Art. 23.—Los miembros de la Cámara de Apelaciones y los jueces de primera instancia no podrán ser recusados sin causa, y regirán para los mismos las causales de incompatibilidad, excusación y recusación establecidas para los magistrados del fuero ordinario de la Capital Federal.

Art. 24.—En los casos de recusación, licencia u otro impedimento, los jueces se reemplazarán recíprocamente en la forma que establezca la Cámara de Apelaciones.

Art. 25.—En caso de licencia u otro impedimento, los secretarios serán reemplazados por otro empleado del Tribunal del Trabajo, que deberá reunir las condiciones exigidas para el titular.

Art. 26.—La Cámara de Apelaciones llevará un registro de peritos y establecerá las condiciones y requisitos que deberán reunir a los efectos de su inscripcón. Los nombramientos de oficio deberán recaer en los peritos inscritos, quienes no podrán, sin justa causa, dejar de aceptar el cargo, bajo pena de exclusión del registro.

Art. 27.—La Secretaría de Trabajo y Previsión formará una lista de expertos, patronales y obreros, de cada una de las actividades a que se refiere el decreto del Poder Ejecutivo 16.116, de fecha 16 de enero de 1933.

Art. 28.—Los expertos que se designen deberán aceptar el cargo, haciéndose pasibles, en caso de negativa infundada, de una multa de veinte a cien pesos, que impondrá el juez. No percibirán honorarios por su actuación, pudiendo el juez determinar, según los casos, una suma compensatoria de los salarios dejados de percibir como consecuencia de su desempeño.

Art. 29.—Los miembros de la Cámara de Apelaciones, jueces de primera instancia, vocales de la Comisión de Conciliación y secretarios no podrán desempeñar ningún otro empleo público o privado, ni ejercer su profesión.

Art. 30.—Las prohibiciones consignadas en el artículo anterior regirán para los empleados de la Cámara de Apelaciones y juzgados de primera instancia.

Art. 31.—La Cámara de Apelaciones nombrará a sus secretarios y demás personal.

Los secretarios y empleados de los juzgados de primera instancia serán nombrados por la cámara a propuesta de los jueces respectivos.

Art. 32. — La Cámara de Apelaciones ejercerá superintendencia sobre los jueces de primera instancia y Comisión de Conciliación.

CAPÍTULO II

Procedimiento

Art. 33. — El procedimiento será verbal y actuado e impulsado de oficio por los jueces.

Art. 34. — Todos los términos serán improrrogables y perentorios; correrán desde el día siguiente al del emplazamiento, citación o notificación. No se contarán los días inhábiles.

Art. 35. — Ante los jueces y Cámara de Apelaciones las partes podrán ser representadas de acuerdo a las disposiciones establecidas en la ley 10.996.

Exista o no representación, la asistencia letrada será obligatoria ante la Cámara de Apelaciones.

Ante la Comisión de Conciliación y las de arbitraje, las partes deberán comparecer personalmente, pudiendo en caso de impedimento ser representadas:

- a) Por parientes dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad;
- b) Tratándose de empleados u obreros, por compañeros de trabajo;
- c) Tratándose de asociaciones, sociedades o empresas, la representación podrá ser ejercida por sus directores, asociados, gerentes o empleados superiores con poder suficiente.

Art. 36. — La representación en juicio podrá ejercerse por carta poder que se otorgará ante el presidente de la Comisión de Conciliación o secretario de juzgado de primera instancia, previa justificación de la identidad del interesado, y deberá ser firmada por el funcionario y el otorgante. En caso de impedimento podrá firmar cualquier persona hábil a ruego del otorgante.

Art. 37. — Los menores adultos tendrán la misma capacidad de los mayores de edad para estar en juicio y podrán otorgar mandato en la forma prescrita en el artículo anterior, previa autorización del Ministerio Público del Trabajo.

Art. 38. — Toda persona que actúe en la jurisdicción del trabajo deberá, en su primera presentación, constituir domicilio legal dentro del límite de la Capital Federal, en el caso que se practicaran todas las diligencias que se ordenen. El domicilio así constituido será válido para todos los efectos legales, mientras no sea substituído.

Art. 39. — Todas las resoluciones serán notificadas por nota. Las sentencias y las citaciones a las audiencias de conciliación y de prueba se notificarán por despacho telegráfico que podrá ser colacionado. En la notificación de la sentencia se transcribirá solamente la parte dispositiva.

Art. 40. — Las providencias quedarán notificadas por nota al siguiente día hábil de ser dictadas.

Art. 41. — Las partes actuarán en papel simple.

Cuando el empleador sea condenado en costas deberá reponer todas las actuaciones. Si se declararan las costas por su orden repondrá las de su parte.

Los trabajadores y sus derechohabientes estarán exentos de reponer el sellado.

Art. 42. — Los jueces darán audiencia pública diariamente durante seis horas, con excepción de los sábados que lo harán durante tres horas.

Art. 43. — Las actuaciones judiciales deberán practicarse en días y horas hábiles, siendo facultad del juez habilitar a ese efecto días y horas cuando lo considere necesario.

Art. 44. — Las audiencias comenzarán a la hora designada, no teniendo los citados obligación de esperar sino media hora.

Art. 45. — En caso de muerte, incapacidad, quiebra o concurso del demandado, las acciones que sean de competencia de la jurisdicción del trabajo, se iniciarán o continuarán en esa jurisdicción, a cuyo efecto deberá notificarse a los respectivos representantes legales.

I. — Procedimiento ante la Comisión de Conciliación

Art. 46. — La demanda deberá interponerse ante la Comisión de Conciliación la que, con las manifestaciones del compareciente, labrará acta en la que se consignará:

- a) El nombre, apellido y domicilio del actor y del demandado;
- b) Los hechos y el derecho en que se funda;
- c) La cosa demandada.

Art. 47. — A fin de que el demandado conteste la demanda, oponga excepciones si las tuviere, y las partes ofrezcan sus pruebas, la Comisión de Conciliación fijará audiencia, la que deberá celebrarse dentro de los cinco días.

Art. 48. — Las partes serán citadas para concurrir personalmente a la audiencia a que se refiere el artículo anterior.

La demandada será notificada de su obligación de contestar la demanda y ofrecer pruebas bajo apercibimiento de lo dispuesto en los artículos 62 y 130.

Art. 49. — La notificación se practicará en el domicilio asignado al demandado por el actor. Si fuere falso, probado el hecho se anulará todo lo actuado a costa del demandante.

Art. 50. — La notificación de la audiencia a que se refiere el artículo 47 deberá ser practicada con una anticipación no menor de dos días.

Art. 51. — Si el demandado se domiciliase fuera de la jurisdicción de la Capital Federal, la notificación se efectuará en la forma establecida en el artículo 39.

Si no concurriese, se practicará la notificación por la autoridad judicial que corresponde a su domicilio, mediante carta rogatoria, cuyo libramiento se solicitará del juez en turno.

Art. 52. — En el caso previsto en el artículo anterior la audiencia se fijará con la anticipación necesaria, y el demandado podrá comparecer personalmente o por medio de apoderado.

Art. 53. — Acreditada fehacientemente la ignorancia del domicilio del demandado, se le citará por edictos que se publicarán por tres días consecutivos en el Boletín Judicial sin cargo para el trabajador.

Si vencido el término de la citación el empleado no compareciere, el juez en turno le designará defensor ad hoc.

Art. 54. — Las audiencias se celebrarán ante la comisión de conciliación la que, abierto el acto, ilustrará a las partes sobre el alcance del procedimiento conciliatorio y propondrá una fórmula de solución.

Art. 55. — Cuando el derecho del trabajador surja de hechos reconocidos por el patrono, no podrá proponerse a las partes soluciones transaccionales.

Art. 56. — La Comisión de Conciliación, a pedido de ambas partes, prorrogará la audiencia para nueva fecha que designará al efecto.

Art. 57. — Los acuerdos conciliatorios o transaccionales celebrados por las partes ante la Comisión de Conciliación pasarán en autoridad de cosa juzgada y en caso de incumplimiento, se seguirá el procedimiento señalado para la ejecución de sentencia.

Art. 58. — En caso de no obtenerse una solución conciliatoria, el demandado deberá en la misma audiencia contestar la demanda y oponer excepciones si las tuviere.

Art. 59. — Si el actor modificare los términos de la demanda, en cuanto a los hechos en que se fundamenta, a solicitud del demandado se señalará nueva audiencia en el mismo acto, quedando las partes notificadas.

Art. 60. — Las partes ofrecerán sus pruebas en el acto de la audiencia a que se refiere el artículo 47 ó por escrito, dentro del término perentorio de tres días de esa audiencia no pudiendo hacerlo en lo sucesivo. Vencido dicho término se elevarán las actuaciones al juez en turno.

Art. 61. — Se aceptarán como medios de prueba, los instrumentos, las informaciones o declaraciones de testigos, los dictámenes de peritos, la inspección ocular, la confesión y las presunciones e indicios.

Art. 62. — Si el demandado debidamente citado no concurriere a la audiencia sin justa causa, o se negare a contestar la demanda, se presumirán como ciertos, salvo prueba en contrario, los hechos alegados por el actor.

Art. 63. — Sólo son admisibles como excepciones, la incompetencia de jurisdicción, la falta de personería de las partes o sus representantes, la litispendencia en otro juzgado o tribunal competente, la cosa juzgada, la transacción y la prescripción.

Art. 64. — En la audiencia a que se refiere el artículo 47, al contestar la demanda, deberán oponerse las excepciones; éstas deberán contestarse en el mismo acto o dentro de dos días. La prueba deberá ofrecerse dentro del término a que se refiere el artículo 60.

II. — Procedimiento judicial

Art. 65. — Recibidas las actuaciones, el juez designará una audiencia pública, que deberá celebrarse dentro de los diez días.

La citación será practicada con una anticipación no menor de dos días, debiendo las partes concurrir personalmente con la prueba ofrecida.

Art. 66. — En la audiencia a que se refiere el artículo precedente, el juez, antes de recibir la prueba que haga a lo principal, examinará la de las excepciones, resolviendo acto continuo sobre su aceptación o rechazo.

La decisión será apelable juntamente con la sentencia en los casos en que el recurso sea procedente contra ésta.

Art. 67. — El juez deberá disponer las diligencias necesarias para que la prueba ofrecida pueda subsanciarse en una sola audiencia. En cualquier estado del juicio podrá decretar las medidas de prueba que estime convenientes.

Art. 68. — Cuando el juez estimare improcedente alguna medida de prueba ofrecida por las partes, podrá denegar su producción mediante resolución fundada, la que será apelable juntamente con la sentencia en los casos en que el recurso sea procedente contra ésta.

Art. 69. — El que deba absolver posiciones será citado por lo menos con dos días de anticipación por despacho telegráfico, bajo apercibimiento de que, si dejare de comparecer sin justa causa, será tenido por confeso sobre los hechos expuestos en la demanda o contestación, salvo prueba en contrario. De este medio probatorio podrán usar las partes una sola vez.

Cuando las partes intervinieren personalmente serán citadas en el domicilio legal que hubieren constituido: si lo hicieren por medio de apoderados la citación se hará en el domicilio real.

Art. 70. — Cuando se trate de sociedades anónimas podrán absolver posiciones, además de sus representantes legales, los directores o gerentes con mandato suficiente.

Art. 71. — En las audiencias de prueba las partes podrán ser asistidas por letrado.

Art. 72. — El juez interrogará personalmente a las partes bajo pena de nulidad y sólo hará constar en el acta las declaraciones que sean pertinentes.

Art. 73. — Si las partes interrogadas por el juez respecto de hechos que les son personales, adujeren ignorancia, contestaren en forma evasiva o se negaren a contestar, podrá estimarse esa actitud como una presunción a favor de los hechos alegados por la contraparte, en cuanto se relacionen con el contenido de la pregunta.

Art. 74. — El juez, cuando lo considere necesario, podrá requerir el asesoramiento de expertos, pudiendo disponer su concurrencia a la audiencia de prueba.

Art. 75. — Podrán ser testigos todas las personas mayores de catorce años. Su número no podrá exceder de cuatro por parte.

Si la naturaleza del juicio lo justificare, podrá admitirse un mayor número de testigos.

Art. 76. — Los testigos serán citados por intermedio de la autoridad policial, haciéndoles conocer las penalidades de que se harán pasibles en el caso de no comparecer sin justa causa. Si no comparecieren se designará nueva audiencia, la que se celebrará dentro de los tres días siguientes, disponiéndose su comparecencia por la fuerza pública. No habiendo justificado su inasistencia se harán pasibles de una multa que impondrá el juez, la que no podrá exceder de cien pesos en cada caso.

Art. 77. — No podrán ser presentados como testigos contra una de las partes, sus consanguíneos o afines en línea directa, ni el cónyuge aunque esté separado legalmente.

Art. 78. — El juez examinará a los testigos previo juramento de decir verdad, haciéndoles saber las disposiciones contenidas en el Código Penal sobre falso testimonio. Deberán dar razón de sus dichos y si no lo hicieren, el juez lo exigirá.

Art. 79. — El juez podrá a petición de parte o de oficio, proceder al careo de los testigos.

Art. 80. — Si la declaración del testigo ofreciere indicios graves de falso testimonio o de soborno el juez podrá decretar de inmediato su detención, poniéndolo a disposición del juez del crimen, con remisión de los testimonios que estime pertinentes.

Art. 81. — Las partes podrán tachar a los testigos por motivo fundado en inhabilidad o en hechos que hicieren presumir la parcialidad de su declaración y el juez al dictar sentencia, apreciará el valor de las mismas.

La prueba de las tachas deberá producirse dentro de los dos días de deducidas.

Art. 82. — Las partes deberán agregar toda la prueba instrumental de que intenten valerse, dentro del término a que se refiere el artículo 60; no teniéndola a su disposición las mencionarán con la individualidad posible dentro de ese término, expresando lo que de ella resulte y designando el lugar en que se encuentre.

Art. 83. — Todo aquel contra quien se presente en juicio un documento privado que se le atribuya, está obligado a declarar si es o no suya la firma.

Negada su autenticidad, si la parte que lo ha presentado insiste en su validez, se procederá al examen pericial.

Art. 84. — Cuando el juez lo crea necesario, podrá trasladarse al local del trabajo a fin de comprobar de visu las circunstancias que considere apreciables como elementos de juicio.

Art. 85. — Cuando la comprobación de los hechos controvertidos requiera conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o industria, se procederá al nombramiento de peritos.

Art. 86. — Los peritos serán nombrados de oficio en todos los casos, pudiendo su número variar de uno a tres, a juicio del magistrado, y de acuerdo a la índole o monto del asunto objeto de la pericia.

Art. 87. — Los peritos podrán ser recusados hasta dos días después de su nombramiento por las causas establecidas para los jueces.

Art. 88. — El juez podrá disponer cuando lo considere necesario, que las pericias se practiquen por profesionales o técnicos dependientes de la administración nacional.

Art. 89. — Producida la prueba, redactada y firmada el acta, las partes, por intermedio, de sus letrados, podrán hacer una breve exposición verbal alegando sobre el mérito de la misma. Acto continuo el magistrado dictará sentencia pudiendo postergar su decisión por un término que no exceda de dos días.

Art. 90. — La sentencia deberá declarar el derecho de los litigantes, condenando o absolviendo en todo o en parte, debiendo fundarse en el texto de la ley y a falta de éste en los principios de leyes análogas y en defecto de éstos en los principios generales del derecho. Supliendo la omisión del demandante, el juez estará facultado para sentenciar *ultra petita*.

Art. 91. — La sentencia condenatoria determinará el plazo dentro del cual deberá procederse su cumplimiento.

Art. 92. — La sentencia condenatoria traerá aparejada, aunque no se solicite, la imposición de costas a la parte vencida.

El juez podrá eximir, en el todo o en parte, de esa responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello.

Art. 93. — En los casos en que la iniciación y prosecución del juicio se haya debido a la negativa injustificada del deudor en el cumplimiento de sus obligaciones, el juez podrá fijar una indemnización compensatoria de los perjuicios ocasionados al acreedor por la demora en la percepción de sus haberes o en el goce de sus beneficios.

En ningún caso esa indemnización podrá ser superior a un veinte por ciento del monto de la condena.

Art. 94. — Las regulaciones de honorarios de letrados y apoderados no podrán importar más del veinte por ciento del valor del litigio.

Los honorarios pertenecen a los profesionales a favor de quienes han sido regulados.

Art. 95. — El juez, si lo pidiere alguna de las partes dentro del siguiente día hábil al de la notificación de la sentencia, podrá corregir cualquier error material, aclarar algún concepto oscuro sin alterar lo substancial de la decisión y suplir cualquier omisión en que hubiese incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio.

Art. 96. — La sentencia y toda otra resolución que recaiga en asuntos en que el monto cuestionado no sea superior a mil pesos serán inapelables. Cuando el monto sea superior a esa suma podrá apelarse de la sentencia definitiva y de las resoluciones por las que se decida la procedencia o improcedencia de las excepciones.

El Ministerio Público del Trabajo, cualquiera sea el monto del juicio y en atención a la importancia de la cuestión de derecho debatida, podrá interponer recurso de apelación contra las sentencias y las resoluciones que decidan excepciones.

Art. 97. — El recurso de apelación deberá interponerse dentro de los dos días de notificada la sentencia.

Art. 98. — Dentro de los tres días subsiguientes al de la interposición del recurso, el apelante deberá expresar agravios por escrito, con firma de letrado.

Art. 99. — Cumplido el requisito establecido en el artículo anterior el juez concederá el recurso y correrá traslado de la expresión de agravios por el término de dos días.

El recurso será denegado cuando no se hayan expresado agravios, quedando firme la sentencia.

Art. 100. — Vencido el término a que se refiere el artículo anterior se elevarán las actuaciones a la Cámara de Apelaciones.

Art. 101. — Recibidas las actuaciones la cámara podrá decretar, de oficio, medidas para mejor proveer, y dictará sentencia en un plazo que no podrá exceder de diez días.

Art. 102. — En los casos a que se refieren los incisos b) y c) del artículo 19, la cámara ajustará el procedimiento al que determinen las leyes especiales por las que se autorice el recurso de apelación.

Art. 103. — La sentencia será extendida en las actuaciones, dejándose copia en el libro destinado al efecto.

Art. 104. — Las resoluciones de la cámara serán pronunciadas a mayoría absoluta de votos de los miembros de la sala que deba atender.

Art. 105. — Las sentencias serán notificadas a las partes en la forma prescrita por el artículo 39.

Art. 106. — Consentida o ejecutoriada la resolución de la cámara se devolverán, sin más trámites, las actuaciones al juzgado de origen.

Art. 107. — Recibidos los autos en el juzgado de origen, el secretario practicará la liquidación corres-

pondiente y se intimará el pago al deudor mediante despacho telegráfico.

No efectuado el pago dentro de los dos días se trabará embargo en bienes del deudor, decretándose la venta de los mismos por el martillero que el juez designe, procediéndose en lo sucesivo de acuerdo a lo que establecen los artículos 509 y siguientes del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial de la Capital Federal.

III. — Recurso de hecho

Art. 108. — El recurso de hecho deberá deducirse por escrito ante la Cámara de Apelaciones y su interposición no suspenderá la tramitación del juicio mientras el expediente no se eleve al superior. Podrá fundarse en retardo de justicia o en que el recurso de apelación no hubiere sido acordado por el juez.

Art. 109. — Cualquiera de las partes podrá solicitar por escrito que el juez dicte sentencia cuando hubiere transcurrido el término a que se refiere el artículo 89. Si vencido el término de dos días de su presentación no se hubiere dictado sentencia, se podrá deducir recurso de queja ante la Cámara de Apelaciones acompañando copia simple del expresado escrito. Si la cámara lo considera procedente, dispondrá que el juez administre justicia dentro del término de dos días.

Si el magistrado desobedeciera la orden sin causa justificada, a juicio del superior, incurrirá en una multa de cien pesos que impondrá la cámara a favor de la parte que haya interpuesto el recurso, pasándose los autos al juez que le sigue en orden de turno.

Art. 110. — Cuando el recurso se deduzca por apelación denegada, deberá interponerse dentro de dos días y acompañarse copia simple de la providencia recurrida. La cámara dispondrá la elevación de los autos y declarará bien o mal denegado el recurso.

IV. — Medidas precautorias

Art. 111. — Podrá decretarse, a petición de parte, embargo preventivo sobre los bienes del deudor:

- Cuando se justifique sumariamente que el deudor trata de enajenar, ocultar o transportar bienes o que, por cualquier causa, se hubiere disminuido notablemente su responsabilidad, en forma que perjudique los intereses del acreedor y siempre que el derecho del peticionante surja verosímelmente de los extremos probados;
- Cuando exista sentencia favorable o confesión expresa o ficta de hechos que hagan presumir el derecho alegado;
- Que la existencia del crédito esté justificada con instrumento público o privado atribuido al deudor, reconocida la firma por dos testigos.

Art. 112. — En todos los casos en que, habiendo lugar a embargo preventivo o definitivo, éste no pudiera hacerse efectivo por no conocerse bienes del deudor, podrá solicitarse contra él inhibición general para vender o gravar sus bienes.

Art. 113. — Cuando cualquier acto de disposición u ocultamiento de bienes, por parte del empleador, pudiera comprometer la efectividad de los derechos concedidos por las leyes del trabajo, el ministerio pú-

blico si lo estimare conveniente podrá solicitar las medidas precautorias a que se refieren los artículos 111 y 112.

V. — Procedimiento arbitral

Art. 114. — Si las partes, en los casos previstos en el artículo 8º, optasen por el procedimiento arbitral, lo manifestarán en la audiencia de conciliación, suscribiendo en el mismo acto el respectivo compromiso en el que se establecerán la cuestión o cuestiones que se cometen, señalándose la audiencia de prueba que deberá celebrarse dentro de los diez días.

Art. 115. — Serán condiciones esenciales del compromiso a las que deberán someterse las partes:

- Que el trabajador deba continuar en el desempeño de sus tareas aceptando provisionalmente las condiciones impuestas;
- Que si la modificación se declarare arbitraria o la rebaja injustificada, el empleador deje sin efecto la modificación o rebaja a partir de la notificación del fallo, reintegrando al trabajador el importe de los salarios que hubiere dejado de percibir como consecuencia de la modificación o rebaja;
- Que si la modificación o rebaja es justificada, el trabajador deberá aceptar las nuevas condiciones.

Art. 116. — Dentro de los tres días de realizada la audiencia de conciliación se designarán los representantes a que se refiere el artículo 6º, mediante la presentación de un escrito donde conste la conformidad de los mismos para el desempeño del cargo, y a quienes se tendrán por nombrados previo juramento y justificación de las condiciones requeridas para su desempeño.

Si las partes no propusieran a sus respectivos representantes en el término expresado, la comisión procederá a nombrarlos de oficio, designándose de la nómina de expertos a que se refiere el artículo 27.

Art. 117. — Las partes ofrecerán las pruebas de que intenten valerse dentro del mismo término fijado en el artículo anterior.

En todos los casos la totalidad de la prueba deberá ser substanciada en la audiencia respectiva e incumbe a las partes adoptar las medidas necesarias para ello. En caso contrario perderán el derecho de hacer uso de las mismas.

Art. 118. — Los miembros de la comisión nombrados por las partes o de oficio, podrán ser recusados dentro del día subsiguiente hábil al de su nombramiento, ante la misma comisión. Son casos de recusación:

- Tener interés directo en el asunto;
- Ser pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, con alguna de las partes;
- Tener enemistad manifiesta con alguna de las partes, por hecho determinado.

La excusación deberá fundarse en las mismas causas.

Art. 119. — La comisión, con exclusión del miembro recusado, resolverá sin más trámite sobre la recusación interpuesta, siendo inapelable su resolución.

Art. 120.—Excluido un representante por excusación o recusación, la parte que lo propuso deberá designar reemplazante dentro de las 24 horas en la forma establecida en el artículo 116.

Art. 121.—El presidente y el secretario de la comisión de arbitraje podrán ser recusados por las mismas causas que los jueces de primera instancia.

Art. 122.—La comisión arbitral procederá sin sujeción a normas legales, limitándose a recibir las pruebas que ofrezcan las partes, en la medida que lo estime necesario para la comprobación de los hechos.

Art. 123.—La comisión se constituirá el día y hora designado para la audiencia de prueba con la totalidad de sus miembros.

Art. 124.—Los representantes designados a propuesta de las partes o de oficio, que dejen de concurrir sin justa causa a la constitución del tribunal, se harán pasibles de una multa de \$ 20 a \$ 100, que aplicará el presidente.

Art. 125.—Producida la prueba, la comisión dictará resolución dentro de un plazo que no excederá de dos días.

La resolución se limitará a expresar si la modificación impuesta está dentro de las facultades patronales o si la rebaja de la remuneración es o no justificada.

Art. 126.—Contra la resolución de la comisión de arbitraje no habrá otro recurso que el de nulidad, que no podrá fundarse sino en haberse resuelto sobre puntos no sometidos a su decisión o en haberlo hecho fuera del término legal.

El recurso se interpondrá dentro del tercer día de la notificación ante la comisión de arbitraje, la que elevará las actuaciones a la Cámara de Apelaciones, que resolverá sin más trámite.

Art. 127.—El compromiso cesa en sus efectos:

- a) Por la voluntad unánime de los que lo contrajeron;
- b) Por el transcurso del término legal establecido para dictar resolución.

CAPÍTULO III

Disposiciones generales

Art. 128.—En cualquier estado del procedimiento se intentará avenir a las partes, mediante soluciones conciliatorias.

Art. 129.—Las autoridades judiciales y administrativas que integren el fuero del trabajo en el ejercicio de sus funciones, podrán imponer apercibimientos y multas hasta cincuenta pesos moneda nacional y arrestos de 24 horas, que podrán aumentarse hasta 48 horas en el caso de reincidencia, por las faltas que se cometieren en las audiencias y demás procedimientos, al respeto y consideración que les son debidos. Las medidas disciplinarias aplicadas por las comisiones de conciliación y arbitraje serán apelables ante el juez de primera instancia, y las impuestas por éste, ante la Cámara.

El recurso de apelación deberá ser interpuesto dentro de las 24 horas.

Art. 130.—Sin perjuicio de las penalidades establecidas en el presente decreto, la Cámara de Apelaciones, los jueces, la Comisión de Conciliación y

las de arbitraje, podrán imponer multas de diez a cien pesos a toda persona que debidamente citada no compareciera sin causa justificada.

Art. 131.—Las multas que se impongan en virtud de lo dispuesto en el presente decreto, deberán ser satisfechas dentro de las 48 horas de su notificación y en caso de no hacerse efectivas se procederá de conformidad con lo que establece el artículo 10 de la ley 11.570.

Art. 132.—La Comisión de Conciliación y el Ministerio Público del Trabajo dependerán de la Secretaría de Trabajo y Previsión y sus miembros serán nombrados por el Poder Ejecutivo a propuesta de la misma.

Art. 133.—La superintendencia a que se refiere el artículo 32 será ejercida por la Cámara de Apelaciones de acuerdo a lo que dispone el artículo 103 de la ley de organización de los tribunales de la Capital Federal.

Sobre la Comisión de Conciliación las facultades derivadas de la superintendencia sólo las ejercerá la Cámara en cuanto a los actos de aquélla vinculados con el procedimiento judicial.

Art. 134.—En el procedimiento conciliatorio y arbitral se actuará en papel simple.

En el procedimiento judicial la reposición deberá hacerse de acuerdo a lo que al respecto establezca la ley de sellos.

Los compromisos arbitrales, así como los convenios resultantes de las soluciones conciliatorias, no estarán sujetos a gravamen fiscal.

Art. 135.—Los apoderados y letrados de la Secretaría de Trabajo y Previsión, cuando ejerzan la representación y patrocinio de empleados y obreros, podrán firmar sin estampilla fiscal, con cargo de reposición en el supuesto de percibir honorarios de los patronos demandados en virtud de condenación con costas.

Art. 136.—Los empleadores no podrán deducir suma alguna de los sueldos o salarios de sus empleados u obreros, cuando éstos se vean obligados a faltar o interrumpir sus tareas por citaciones de las autoridades del fuero especial del trabajo; en caso contrario se harán pasibles de las sanciones previstas en el artículo 9º de la ley 11.278.

Art. 137.—En las cuestiones de competencia que se susciten se procederá en la forma prescrita en el título X del Código de Procedimiento en lo Civil y Comercial de la Capital Federal.

Art. 138.—Los hechos en que se fundamenten las demandas que se deduzcan ante la jurisdicción de trabajo y que hayan dado lugar a resoluciones administrativas condenatorias de la Secretaría de Trabajo y Previsión, en uso de sus facultades, serán tenidos por ciertos, salvo prueba en contrario.

Art. 139.—A partir de la vigencia del decreto 21.425 las acciones derivadas de la ley 9.683 se tramitarán de acuerdo al procedimiento que el mismo establece, actuando como tribunal de apelación en la Capital Federal la Cámara de Apelaciones de la jurisdicción del trabajo.

Art. 140.—Quedan derogadas las disposiciones de la ley 12.713 en cuanto encomiendan a las comisiones de Conciliación y Arbitraje de la Capital Federal, la substanciación y resolución de las cuestiones comprendidas en el artículo 32 de la misma.

CAPÍTULO IV

Disposiciones transitorias

Art. 141.— Los juicios actualmente en trámite en otras jurisdicciones que sean de competencia de la que se crea por el presente decreto, quedarán radicados en los tribunales de origen hasta su terminación.

Art. 142.— Por primera vez, para los nombramientos a que se refiere el artículo 10, la Secretaría de Trabajo y Previsión hará las propuestas prescindiendo de la terna. El juramento de los miembros de la Cámara de Apelaciones, en esta oportunidad, se prestará ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Art. 143.— La Cámara de Apelaciones tendrá un oficial mayor, tres oficiales primeros, un habilitado, tres auxiliares, cinco escribientes principales, cinco escribientes, un mayordomo y cuatro ordenanzas.

Cada juzgado tendrá un auxiliar mayor, un auxiliar primero, un auxiliar, un escribiente principal, un escribiente y un ordenanza.

Habrán cuatro oficiales de justicia, que dependerán de la cámara.

Art. 144.— Este decreto comenzará a regir a partir del 1º de marzo de 1945.

Art. 145.— La Secretaría de Trabajo y Previsión adoptará las medidas necesarias para que los organismos creados por el presente decreto inicien su actuación en el presente término fijado en el artículo anterior.

Art. 146.— Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Art. 147.— Comuníquese, publíquese, dese al Registro Nacional y archívese.

FARRELL.

Juan Perón. — Rómulo Etcheverry Boneo.
— Alberto Teisairé. — Orlando L. Peluffo.
— Juan Pistarini. — César Ameghino.

—A la Comisión de Legislación General

III

Buenos Aires, 13 de julio de 1946.

Al Honorable Congreso de la Nación.

La marina de guerra, desde el año 1905 ha regido a su personal por la ley 4.856 (orgánica de la armada). En diversas oportunidades se han introducido a la misma modificaciones, modernizándola en parte y, en el transcurso de años anteriores a la época actual, se han presentado numerosas iniciativas de revisión al Honorable Congreso, lo que pone de relieve la insuficiencia de las normas legales que han estado regulando la vida del personal naval en estos últimos tiempos.

El Poder Ejecutivo, a partir del 4 de junio de 1943, para resolver los inconvenientes planteados por la falta de un instrumento legal a tono con las exigencias de la época, ha tenido también necesidad de adoptar algunas medidas modificando la ley 4.856 y finalmente dictar, luego de un estudio encomendado al Ministerio de Marina y como resultado del mismo, un decreto en acuerdo general de ministros, 10.700,

de fecha 30 de mayo de 1945, que entró en vigencia el 1º de mayo de 1945, y que substituyó a partir de esa fecha a la ley 4.856 y sus complementarias.

La nueva ley orgánica para el personal de la marina de guerra, tiene en las disposiciones del decreto 10.700/45 el instrumento orgánico que el desenvolvimiento de la armada reclamaba, dotándola de disposiciones acordes con la época y con el progreso alcanzado por la misma.

Las distintas medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo en la materia, se concretan en los decretos que se detallan a continuación, los cuales corresponden ser considerados por vuestra honorabilidad, a los efectos de su ratificación:

- 1.—Decreto 3.000/43, acuerdo general de ministros del 15 de julio de 1943. Modificación cuadro inciso c), artículo 1º, ley 12.626. Aumentando los efectivos de oficiales superiores.
- 2.—Decreto 4.239/43, acuerdo general de ministros del 4 de agosto de 1943, ampliando el decreto 3.000/43, en lo referente a la fecha en que las vacantes se considerarán existentes en los respectivos escalafones.
- 3.—Decreto 9.148/44, acuerdo general de ministros del 11 de abril de 1944. Modificadorio del artículo 107 de la ley 11.672 (edición 1943). Aumentando el efectivo del cuerpo de auditores de la armada.
- 4.—Decreto 11.576/44, acuerdo general de ministros del 3 de mayo de 1944, introduciendo modificaciones al ingreso del personal de oficiales de algunos cuerpos.
- 5.—Decreto 28.645/44, acuerdo general de ministros del 20 de octubre de 1944, modificando el número de oficiales superiores por cuerpos.
- 6.—Decreto 10.700/45, acuerdo general de ministros del 30 de mayo de 1945. Ley orgánica para el personal de la marina de guerra, en substitución de la ley orgánica de la armada 4.856.
- 7.—Decreto 13.402/45, acuerdo general de ministros del 25 de junio de 1945, reconociendo para el personal superior en situación de retiro las nuevas denominaciones de la ley orgánica para el personal de la marina de guerra.
- 8.—Decreto 14.082/45, acuerdo general de ministros del 26 de junio de 1945, substituyendo el segundo párrafo del artículo 35 de la ley orgánica para el personal de la marina de guerra.
- 9.—Decreto 22.691/45, acuerdo general de ministros del 26 de septiembre de 1945, modificando algunos artículos de la ley orgánica para el personal de la marina de guerra (decreto 10.700/45 del 30 de mayo de 1945).
- 10.—Decreto 15.116/46, acuerdo general de ministros del 27 de mayo de 1946, modificando la ley orgánica para el personal de la marina de guerra (decretos 10.700 del 30 de mayo de 1945 y 22.691 del 26 de septiembre de 1945) en la forma que indica.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

JUAN PERÓN.
Fidel L. Anadón.